SUPLEMENTO ECONOMICO DE PAGINA/12 4 DE ENERO DE 2009 AÑO 19 Nº 979



DEBATE

Primer Documento de Trabajo Colectivo de la Comisión de Economía de Carta Abierta

Sin Estado no hay Nación

Cash **publica completo el documento que nació de un intenso debate colectivo desarrollado en la Comisión de Economía de Carta Abierta. Su elaboración es resultado de diversas jornadas de trabajo, de las que participaron más de treinta profesionales y miembros de organizaciones sociales con formación en diversas disciplinas.**

Adrián Pérez

Sin Estado...

POR COMISION DE ECONOMIA DE CARTA ABIERTA

La preeminencia de las corrientes ortodoxas en materia de pensamiento económico durante los últimos treinta años constituyó el principal sustento ideológico de las políticas neoliberales aplicadas en la región e implicó la negación axiomática del carácter esencialmente social y político de las relaciones vinculadas con la producción y distribución del excedente económico. La profusión de esta mirada redundó en un cambio cultural paradigmático con negativas implicancias en materia de desarrollo estructural y derechos sociales y económicos básicos de nuestro pueblo.

Presentada como una ciencia exacta, independiente de cualquier conflictividad social, la economía convencional avanzó en el establecimiento de agendas de política económica dirigidas a limitar la intervención pública sobre las tendencias del mercado. El derecho ilimitado al lucro como principal incentivo del accionar privado, con prescindencia de su impacto sobre el conjunto social a corto, mediano y largo plazo, se impuso como principal noción cultural rectora de la política económica.

Problemáticas centrales del debate económico, como el desarrollo, la distribución del ingreso, el logro del pleno empleo, la preservación de los derechos laborales, la planificación y el estímulo a la industrialización, entre tantas otras, fueron erradicadas de la agenda económica, de los planes de estudio y aun ridiculizadas en ámbitos especializados.

Sucesos tan disímiles como el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar, las crisis hiperinflacionarias de finales de los años ’80 y comienzos de los ’90 y el supuesto triunfo histórico del mercado como único regulador social luego de la caída del Muro de Berlín, corporizado en el Consenso de Washington, indujeron cambios político-culturales profundos, redefiniendo los límites de los ámbitos público y privado.

El Estado, como principal esfera receptora de las tensiones y contradicciones entre clases y sectores sociales, privatizó sus potestades regulatorias en materia económica, transfiriéndolas al mercado. Liberadas las fuerzas asimétricas de los agentes económicos de los límites impuestos por la institución que debía velar por los intereses colectivos, el rumbo económico apuntó a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías y la desintegración del aparato productivo.

Lejos de desaparecer, el Estado fue reconfigurado en función de los intereses de un núcleo económico de diversos orígenes. La desarticulación de las normas, instituciones y mecanismos públicos de intervención sobre el mercado –imprescindibles para conducir un programa de desarrollo con equidad– completó la reforma neoliberal del Estado y dio estabilidad de largo plazo a la descomunal transferencia de excedentes económicos desde las mayorías empobrecidas e indigentes hacia un núcleo concentrado de capital local y extranjero.

La reorganización neoliberal del Estado también incluyó la reducción de la cantidad, la calidad y formación de sus cuadros técnicos. En lugar de aprovechar la extensa experiencia acumulada durante décadas de regulación estatal, abriendo la posibilidad de reformular aspectos deficientes, se optó por su prescindencia. Se llegó incluso a nombrar funcionarios cuyo principal objetivo residía en destruir la calidad de los servicios y la situación económico-financiera de las empresas públicas con el fin de generar las condiciones necesarias para su posterior privatización.

El proverbio implantado rezaba: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.

Es necesario destacar el inmenso costo social y económico impuesto por este tipo de políticas, en momentos en que diversos actores privilegiados comienzan a reclamar una vuelta a las tendencias de aquellos años. El corolario de esas reformas, combinadas con esquemas de tipo de cambio apreciado y acelerado endeudamiento externo, residió en la desarticulación del aparato productivo local, el aumento del desempleo y de la pobreza. El masivo ingreso de importaciones produjo la quiebra y liquidación de empresas que podrían haber sido eficientes en otros escenarios, interrumpiendo las trayectorias de aprendizaje tecnológico construidas en etapas previas, orientadas a la industrialización de la Nación. El desempleo alcanzó tasas exorbitantes, superiores al 20 por ciento, y la pobreza atrapó a más de la mitad de la población.

Nociones básicas

El reciente conflicto con los empresarios agropecuarios por la aplicación de derechos de exportación móviles profundizó una incipiente tendencia a recuperar nociones básicas de la Economía Política. “Renta extraordinaria”, “salarios y ganancia”, “distribución del ingreso”, “modelo nacional de desarrollo” y “rol activo del Estado” reaparecieron en el discurso colectivo, agregando entidad conceptual al conflicto expuesto en las calles. “Estado” y “mercado” fueron recuperados como significantes de visiones antagónicas sobre el rumbo económico.

El nucleamiento de la nueva derecha en torno del rechazo a las retenciones móviles aportó simultáneamente un punto de acumulación opositora hasta entonces ausente y un rechazo a la intervención del Estado en la economía. Y aunque intente disimularse, este hecho político-discursivo evidencia un parentesco innegable con la lógica neoliberal que dominó los programas económicos de la última dictadura y de la década del ’90. Supuso, en los hechos, un reeditado darwinismo social estrechamente vinculado con la liberalización comercial, la apertura financiera, la desregulación, las privatizaciones y la descentralización de la provisión de bienes públicos sin la transferencia de recursos hacia provincias y municipios, operados durante esos períodos de la historia reciente argentina.

Si la crisis de 1989-1990 tuvo un efecto disciplinador en la sociedad que coadyuvó a la consolidación del pensamiento y el modelo neoliberal, la implosión política, social y económica de 2001-2002 llevaría a un reconocimiento general de su fracaso. La transformación del escenario ideológico que tuvo lugar en los últimos años permitió el resurgimiento de un discurso nacional-transformador que revalorizó ya no sólo la eficiencia sino también –y centralmente– la equidad como pauta fundamental en los objetivos básicos del desarrollo y la aparición de un modelo económico alternativo a los programas neoliberales instalados a partir de 1976. Estos últimos, a diferencia del actual, se inspiraron en una concepción asentada en la valoración del capital financiero y se afirmaron en toda América latina, a partir de 1989, guiados por los principios del Consenso de Washington, cuyo fracaso económico y social sufrió prácticamente toda la región en la década siguiente.

No obstante, las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de incipiente industrialización con altos niveles de empleo y avances en la distribución del ingreso, en los que las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional. La experiencia de esa etapa muestra que la adopción de un sistema de tipos de cambio diferenciales a través de una tasa de cambio elevada con retenciones –destinada a captar para la sociedad la renta extraordinaria de carácter diferencial de la tierra más fértil del país (la pampa húmeda)– constituye una medida de política heterodoxa que incentiva la producción y promueve el desarrollo industrial.

Debacle: Llaman la atención afirmaciones de funcionarios sobre la necesidad de “reconectarnos” a las, hoy en debacle, esferas financieras internacionales.

Las declaraciones que buscaron imprimir un tinte “confiscatorio” a las retenciones –derecho cuya imposición es facultad legítima del gobierno nacional– y las fantasías de un pequeño grupo de actores supuestamente representativo del “campo”, que pretendió identificar al sector con la Nación, ha buscado reinstalar en el sentido común el rechazo a la intervención del Estado. Cuando la incursión de productores y propietarios rurales de la pampa húmeda, absolutamente minoritarios entre los que reúne la actividad agraria del país, y de clases medias urbanas, ligadas directa o indirectamente al incremento de la renta agropecuaria extraordinaria, hizo estallar la confrontación y el debate, las estrategias discursivas de la nueva derecha reavivaron mitos oxidados de la ideología liberal, los cuales fueron intensamente multiplicados por las operaciones políticas de gran parte de los medios de comunicación.

Heterodoxia

El régimen económico heterodoxo, que viene sosteniendo el gobierno nacional como objetivo irrenunciable a nivel macro, reposa en el mantenimiento de un tipo de cambio elevado, competitivo y estable a través de la intervención del Banco Central para evitar la apreciación cambiaria. La obtención de superávit fiscal y externo permite recrear un régimen de acumulación solvente, enfatizando una mayor participación del Estado en la economía. Al mismo tiempo, se reduce la vulnerabilidad externa a partir de la acumulación virtuosa de reservas vía el sostenimiento del tipo de cambio alto y saldos positivos del comercio exterior. La cancelación de las obligaciones con el FMI, la reestructuración de la deuda pública y las renegociaciones de los compromisos externos a largo plazo son conquistas emblemáticas dirigidas a liberar al país de trampas y grilletes heredados del neoliberalismo y fortalecer su posición internacional.

La política económica de tipo de cambio real alto incrementa la competitividad de las exportaciones y promueve la sustitución de importaciones por producción local, conllevando un crecimiento sostenido de la actividad económica. A fines de este año se va a cumplir el ciclo histórico de crecimiento económico más extenso y de mayor magnitud de la tasa de expansión del PBI –más del 8 por ciento anual– de la historia económica argentina. La valoración productiva como eje del actual proceso, en reemplazo del regido por la valoración financiera, permitió la rehabilitación y reindustrialización de la estructura productiva local, que posibilitó aumentar la productividad e incentivar la creación de empleos. En este contexto, la política de negociación salarial hizo posible obtener incrementos en los salarios reales de los trabajadores formales, incorporar más de un millón de nuevos jubilados e ir recuperando significativamente la vergonzosa jubilación mínima heredada del neoliberalismo.

El sostenimiento de la política económica y la preservación de medidas macroprudenciales, como el control de capitales, el manejo racional de las reservas internacionales y la regulación del mercado cambiario, han permitido amortiguar los impactos en nuestra economía de la crisis financiera internacional. Así, la suerte de nuestro país en la actual coyuntura está más vinculada con las implicancias de la crisis en un socio regional tan relevante como Brasil y con la variación de los precios de los productos primarios exportables, que con los avatares directos del irracional funcionamiento del sistema financiero internacional, respecto del cual hemos logrado mayores grados de autonomía.

En materia de política internacional, durante los últimos años nuestro país ha jugado un rol fundamental en la crítica global al funcionamiento de instituciones como el FMI y ha participado en iniciativas internacionales tendientes a su radical transformación en beneficio de los países de desarrollo medio y bajo. Ha sido escenario de multitudinarias manifestaciones de repudio y contribuido al rechazo de estrategias tendientes al libre comercio, como el ALCA. Y ha colaborado activamente, junto a numerosos países de la región, en el establecimiento de agendas de integración económica, social y política. En el contexto de la actual crisis, las recientes intervenciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en foros internacionales sobre la irracionalidad del sistema financiero mundial y la necesidad de crear formas más virtuosas de regulación en esa materia evidencian una continuidad en la búsqueda colectiva de mayores grados de libertad para las políticas de desarrollo nacional y regional.

En este marco, llaman la atención las afirmaciones apologéticas de algunos funcionarios gubernamentales sobre la necesidad de “reconectarnos” a las, hoy en debacle, esferas financieras internacionales. El sentido ideológico y político de tales discursos, desconectados del carácter de la política exterior concreta actual y reciente, parece intentar discurrir en la dirección de una resignificación de los actos de gobierno hacia senderos más ortodoxos. En todo caso, resulta más racional y adecuado, en términos políticos y económicos, continuar la reconexión integradora con países de la región y de características relativas similares, como condición para establecer nuevas dinámicas de vinculación internacional tendientes al desarrollo y la equidad.

Intervención pública

El desafío de alcanzar avances significativos en materia de distribución del ingreso, luego de treinta años de concentración creciente, requiere un enfoque de la problemática del incremento de los precios radicalmente diferente de la vigente durante la etapa neoliberal, rescatada recientemente por algunos economistas de origen heterodoxo. La necesaria recuperación de los mecanismos de intervención pública en materia económica es un prerrequisito indispensable para desarrollar una política de ingresos que contemple la reciente aceleración en el incremento de los precios. El control de la evolución de los precios internos debe plantearse garantizando la preservación y el progreso de las mejoras que se han ido obteniendo en la distribución del ingreso. En tal sentido, la política antiinflacionaria debe ser funcional a políticas de distribución y no a la inversa, respondiendo al carácter estructural de la economía argentina.

Resulta prioritario e imprescindible tener en cuenta que el incremento sostenido de los precios erosiona los ingresos de la clase trabajadora y del conjunto de la población de ingresos fijos, al tiempo que amenaza uno de los pilares centrales del modelo económico: el tipo de cambio real. También es necesario considerar que las tradicionales y conocidas políticas de ajuste y estabilización sustentadas en apreciaciones cambiarias, restricciones al consumo popular y/o enfriamientos de la economía sólo se mantienen empeorando la vida de los sectores populares.

Dada la concentrada distribución de la riqueza, como rasgo estructural de la economía argentina, resulta fundamental una política pública intensa dirigida a la recuperación sostenida del mercado de trabajo e incrementos salariales que superen la inflación y los incrementos de produc-

Alejandro Elías



tividad, de manera de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso total.

Sostenemos que el Estado debe enfrentar las tensiones entre los intereses de clase en torno de la apropiación de los frutos del crecimiento económico. Para ello es indispensable regular el comportamiento de los sectores económicos dominantes con el objetivo de viabilizar la redistribución social del ingreso. Todo lo cual exige dotar al Estado de instrumentos válidos para enfrentar la puja distributiva e intervenir eficientemente en el comportamiento de los agentes oligopólicos y monopólicos presentes en las cadenas productivas, fruto de un proceso histórico de concentración económica.

El esquema de retenciones propuesto en la resolución 125 y sus enmiendas aprobadas en la Cámara de Diputados habrían permitido mejorar el desacople de los precios internos de los alimentos de los fijados en el mercado internacional, preservando los salarios reales, y favorecer sustancialmente a los pequeños productores. En tanto las retenciones permiten mantener aislado el nivel de precios internos del vigente en el mercado internacional, la movilidad del esquema actúa moderando el efecto de las variaciones de este último. Su aplicación habría favorecido el desarrollo industrial nacional, al funcionar como un sistema de tipos de cambio múltiples. La experiencia reciente muestra que los propios productores se habrían visto protegidos ante una baja del precio internacional de oleaginosas y cereales. El debate sobre el uso de este mecanismo posee profundas raíces en nuestra historia nacional desde la imposición del esquema agroexportador de 1880.

La consolidación de una estructura productiva diversificada y el incremento de las ganancias de competitividad requieren de una intervención planificada del Estado. Es un ejercicio soberano imprescindible para coordinar los objetivos de la política económica en múltiples niveles, incorporando programas sectoriales específicos y regímenes de promoción a la exportación y a la innovación tecnológica, que apunten a resolver las problemáticas más complejas de los distintos sectores productivos. La ausencia de políticas efectivas en este sentido, así como de avances en el necesario diseño estratégico de un proyecto económico de transformación nacional, conducen a sostener la política económica exclusivamente en la reforma macroeconómica acompañada de medidas coyunturales aisladas. Por este sendero quedarían nuevamente postergadas las definiciones de largo plazo de orden estructural y restringido un diverso conjunto de estrategias eficientes para reducir la enorme brecha social heredada.

Encrucijada

Una mirada atenta permite advertir un escenario de intensas disputas por el rumbo que asumirá la política económica futura, su perfil socioeconómico, su influencia sobre los proyectos regionales posibles y el carácter de la democracia misma en nuestro país. Y es en el carácter de ese escenario, con los desafíos e interrogantes que nos propone, donde radica la enorme riqueza y oportunidad de la etapa.

Luego de un extenso período de vigoroso crecimiento económico, basado en una dinámica de acumulación endógena con incremento constante del empleo, y habiendo logrado la reconstrucción institucional con eje en la defensa de los Derechos Humanos, el Estado y la sociedad argentina enfrentan una encrucijada cuya profundidad la ubica como un dilema central con incumbencias de largo plazo: la profundización de un paradigma de desarrollo socioeconómico, cambio estructural, distribución de la riqueza y ampliación de un concepto de ciudadanía radicalmente más amplio que el impuesto por las "señales" del mercado, o la reconstrucción del –hoy en crisis– modelo neoliberal en el contexto de políticas heterodoxas de validez indiscutible, que ubique a un puñado de elites y grupos económicos como los principales perceptores del excedente económico.

Esta encrucijada, que convoca a formas diversas de organización popular, a un ejercicio de ciudadanía democrática ampliada y multilateral, constituye el desafío de un laberinto no sólo argentino sino ya latinoamericano. Los conflictos desatados en Bolivia por la construcción de una sociedad y un Estado capaces de contener y proyectar a todo un pueblo, la refundación de Ecuador, las perspectivas en Paraguay, las diversas iniciativas en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, forman parte de esa búsqueda y esa oportunidad.

El retorno de la política al debate económico constituye una condición insoslayable en la actual etapa. La viabilidad efectiva de un programa de desarrollo económico con inclusión y distribución resulta impensable sin la organización y expresión de las clases y sectores populares destinatarios de este cambio de época. Durante el reciente conflicto por la aplicación de retenciones móviles, el hoy escaso desarrollo de los movimientos sociales y políticos –en relación con la magnitud de los desafíos actuales y el surgimiento de la nueva derecha—, configuró un escenario cuyos actores fundamentales fueron el Gobierno y los empresarios del sector, devenidos estos últimos el grotesco intento de encarnación mediática de un supuesto "pueblo".

> **Política:** La política antiinflacionaria debe ser funcional a la política de distribución y no a la inversa, respondiendo al carácter estructural de la economía.

Como emergente de las paradojas de la etapa, el Estado ejerció la representación de un pueblo cuya organización no fue suficiente para materializarse en la escena política, poniendo en cuestión con esa imposibilidad la legitimidad de una medida dirigida a preservar el salario real.

El rumbo de cambios iniciado hace escaso tiempo y la continuidad de las políticas de desarrollo requieren la recuperación y reconfiguración de un Estado de nuevas características. Lejos de la estructura burocratizada, que durante décadas ha mostrado sus estrechos límites en numerosos aspectos, se presenta la necesidad de construir un Estado dotado de las herramientas para intervenir activamente en el sendero social, económico, productivo y distributivo. Capaz de resignificar y recuperar su rol en la planificación del desarrollo y la construcción de un proyecto nacional y democrático. Consustanciado en su diagramación institucional e instrumental con objetivos económicos inclusivos, y consciente de las restricciones estructurales y sociales que enfrenta. Pensado de manera multilateral, en tanto regulador social imbricado por las demandas y necesidades de una sociedad civil activa y diversa, plural e incluso contradictoria.

Desarrollo nacional

Resulta fundamental continuar y profundizar la actual agenda regional e internacional de nuestro país. La crisis actual, centrada en las principales economías del planeta, evidencia la necesidad de avanzar en las iniciativas de integración. Más aún, constituye una oportunidad para establecer formas de coordinación diferentes de las impuestas por los estrechos límites del paradigma conceptual dominante hasta hace pocas semanas en materia de economía internacional. Tales acciones son: el crecimiento de Unasur, la profundización del Mercosur ampliado, la coordinación macroeconómica conjunta, la desdolarización de los intercambios, el Banco del Sur y la banca de desarrollo en general, el crecimiento de la demanda interna y la distribución de la riqueza a escala regional, la resolución de asimetrías, el desarrollo de ciencia y tecnología. Para su éxito, estas iniciativas deben contar con una escala regional que las haga posibles.

Sostenemos que sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional que persiga el bienestar general por encima de los intereses económicos particulares. Una hipotética actitud pasiva ante los conflictos latentes y explícitos dejaría el camino libre para la imposición de los intereses de quienes concentran el poder económico en la Argentina.

Para impulsar un modelo económico de desarrollo con equidad es indispensable la reconstrucción de un imaginario social que recupere la relevancia de lo político y la intervención del Estado como requisito para promover el crecimiento de la Nación. C

economia.carta.abierta@gmail.com

Propuesta
desarrollo

- El presente documento es fruto del intenso debate colectivo desarrollado en la Comisión de Economía de Carta Abierta.
- Las disputas mantenidas recientemente reflotan viejas controversias planteadas en los años de incipiente industrialización.
- Las antinomias Estado/mercado y agro/industria dirimían la orientación del modelo de desarrollo nacional.
- La suerte de nuestro país en la actual coyuntura está más vinculada con las implicancias de la crisis en un socio regional tan relevante como Brasil y a la variación de los precios de los productos primarios exportables.
- Sólo la intervención consciente y planificada del Estado, y en particular la dirigida a proteger a los sectores populares más vulnerables, es capaz de articular un modelo de desarrollo nacional.

Opinión
campo

■ “El capital financiero aprovechó la devaluación para comprar y arrendar tierras. El Gobierno dejó hacer por los problemas externos.”

■ “Cuando la frontera de la tierra disponible se agotó, los precios de los campos y de los alquileres volvieron a subir.”

■ “Se debe recordar que gobernar el capitalismo, nos guste éste o no, implica instrumentar un doble intercambio intertemporal, entre beneficios actuales y futuros.”

■ “Se puede reemplazar la mayor parte de los tributos agrarios por el impuesto a la renta potencial.”

■ “Esa base la podría establecer rápidamente el INTA y se gravaría la renta por hectárea basada en rendimientos de escala con una fuerte progresividad.”

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA RELACION FISCAL CON EL SECTOR AGROPECUARIO

Sin demoras

El autor plantea que el impuesto a la renta potencial evitaría transferencias injustificadas de ingresos y operaría como herramienta antiinflacionaria y redistributiva a la vez.

POR ARIEL H. COLOMBO *

El capital financiero aprovechó la devaluación para comprar y arrendar tierras. El Gobierno dejó hacer por los problemas externos. Cuando la frontera de la tierra disponible se agotó, los precios de los campos y de los alquileres volvieron a subir. En febrero los fondos de siembra ya ofrecían 2400 pesos por hectárea para el próximo ciclo. Pero todo iba a seguir más o menos igual, porque con el ascenso del precio de la soja se podía afrontar esas subas y también la de los insumos, y la rentabilidad esperada para 2008-2009 compensaría los límites alcanzados en las tierras alquilables y en los rindes. En ese momento el Gobierno se cruza con el incremento y movilidad de las retenciones, justo lo que unificaría a los grandes actores del negocio agropecuario con sus socios menores y variables de ajuste (rentistas, contratistas, cerealeras, técnicos, chacareros), los que se constituyeron en tropas de choque. Pese a que las nuevas medidas solo recortaba las expectativas de mediano plazo, el campo desde el vamos tuvo claro para sí mismo que quería ir hasta el final, y que el diálogo solo podía ser táctico. El intento, no disimulado en privado, de “bajar” a la Presidenta, quedó en evidencia por la posición crudamente instrumentalista ante las instituciones, y por el oportunismo de las representaciones rurales, que ni siquiera pudieron acordar una propuesta, aspirando a que el gobierno resuelva sus problemas sin tener que pelearse entre ellas y haciendo reserva del uso de la fuerza en el caso de resultar desfavorecidas. No es casual que los cortes no evitaran que los costos de la acción recayera sobre terceros, por medio del desabastecimiento y la inflación, pese a que se sabía perfectamente que el Gobierno no reprimiría, y que al desafiar la legitimidad de las autoridades obligaran a la sociedad a definirse no en relación al problema originario sino a favor o en contra de toda la gestión del Gobierno. Esta violencia extorsiva, la irracional furia anti K y el ensañamiento antigubernamental, son comprensibles solo por el sentimiento de autocontradicción de sectores de la pampa húmeda que se han fortalecido económicamente gracias a una política con la cual no se identifican, y por el antiigualitarismo racista de buena parte de las clases medias, urbanas y rurales.

La total ausencia de perspectiva histórica y comparada, que llevó a la oposición partidaria más al agravio que a la crítica, y a la miserabilidad de no admitir ni uno de los aciertos oficiales para luego impugnarlos en lugar de hacerlo con los errores, tiene ahora como contrapeso una reacción sectorial de la que buena parte de los perdedores electorales se sirven como cuzcos garroneros, prendiéndose de los talones de un gobierno que mal o bien ha resistido a las corporaciones, hasta alcanzar una autonomía política que todo opositor sinceramente democrático debiera agradecer y que no tuvo ningún otro antecesor. Por todo esto el Gobierno está obligado políticamente a derrotar con todas sus fuerzas a esta alianza tácita que congregó todos los “no”, que es incapaz de articular un solo “sí”, que expresa lo peor del pasado y del presente, y que si llegara al poder supondría un retroceso abismal. Debe prepararse para vencer a esta derecha instintiva, cría neoliberal de la dictadura y del menemismo, cuyos disfraces fueron cayendo uno tras otro durante estos últimos meses. Prepararse para hacerlo en todos los terrenos, por su propia sobrevivencia y por la del país. Por medio de la movilización popular, pero también con cambios irreversibles e instrumentos contundentes, en este caso, frente a una burguesía pampeana que ha sido la base social de todas las dictaduras, con clara conciencia de que la concentración de la propiedad y de las decisiones económicas, que los tecnócratas banalizan, será siempre el mayor obstáculo al funcionamiento republicano, y con una paciente búsqueda de interlocutores a su izquierda, que pueden ayudarlo eficazmente ante el acoso derechista.

En lo inmediato debe recordar que gobernar el capitalismo, nos guste éste o no, implica instrumentar un doble intercambio intertemporal, entre beneficios actuales y futuros, por el cual capitalistas y ciudadanos aceptan menos ahora confiando en que recibirán más después. Dado que esta confianza no se establece programando expectativas sino liberándolas, la conciliación entre el corto y el largo plazo se realiza interviniendo con políticas de reforma, cuya sanción no necesitaría más fuerza que la que ya cuenta el actual Gobierno en el Congreso y en las provincias. A modo de ejemplo, una de ellas consiste en reemplazar la mayor parte de los tributos agrarios por el impuesto a la renta potencial –cuya base podría establecer rápidamente el INTA– gravando la renta por hectárea basada en rendimientos de escala con una fuerte progresividad, hoy burlada en el impuesto inmobiliario a raíz de la subvaluación fiscal en un sector que se ha industrializado y posee costos marginales decrecientes, y coparticipando a municipios y provincias de modo automático, en proporciones que reflejen prioridades ambientales y sociales decididas por el Congreso. Esta imposición desacoplaría precios de ingresos agropecuarios y reduciría drásticamente la evasión, metas funcionales a una nueva ley de arrendamiento que reorientara al capital financiero hacia inversiones industriales que amplíen la oferta de insumos y agreguen valor a los saldos exportables. Otra de esas políticas podría centrarse en una oficina capaz de asegurarse volúmenes y precios en los mercados de futuros, aquí y en el exterior, para que el país pueda capitalizar las diferencias y con ellas asegurar alimentos baratos y precios-sostén a los productores que trabajan para el mercado interno, complementando en este plano el rol de las retenciones, cuya movilidad podría ser derogada más adelante en función de promover el trueque de expectativas temporales antes mencionado, y preservar el efecto “zanahoria”. Es decir, así como el impuesto a la renta potencial contrarrestaría transferencias injustificadas de ingresos, esta apropiación de ventajas especulativas en los mercados granarios operaría como herramienta anticipadamente antiinflacionaria y redistributiva a la vez.

Pero hay que hacerlo ya, con iniciativas estatales que desde el futuro obliguen a pensar el presente en nuevos términos. C

* Cientista político. Investigador del Conicet.

Ana D’Angelo



“El impuesto inmobiliario se recauda sobre una subvaluación fiscal.”

Sumacero

el Dato

La depreciación de los activos y otros efectos de la crisis financiera internacional impactaron de lleno en la fortuna del magnate ruso **Roman Abramovich**, quien, según la agencia oficial rusa Prime-Tass, redujo su capital de 16.700 a 2300 millones de euros. Para sobrellevar esta situación, trascendió que Abramovich estudia la posibilidad de vender el club Chelsea, en el que desde julio de 2003 invirtió unos 210 millones de euros, incluidas las deudas, o bien su yate Pelorus, de 115 metros de eslora y valuado en unos 200 millones de euros.

el Gurú

“A partir de agosto de 2009 empezará a mejorar la crisis, y en 2010 estará superada por completo.” Así lo pronosticó **Zhao Yuanfu**, maestro del templo taoísta *Bai Yun* (“nube blanca”, en mandarín), uno de los más importantes de China. Zhao basa sus predicciones en las creencias del *Fengshui* (“viento y agua”) y en la observación de la naturaleza y de los astros. Lo que sin duda lo convierte en un rival de fuste para Miguel Angel Broda, Ricardo Arriazu, José Luis Espert y Guillermo Calvo, entre otros, quienes vienen asegurando, desde hace más de cinco años, que todo va a empeorar.

El Libro

LA NUEVA HISTORIA DE EMPRESAS EN AMERICA LATINA Y ESPAÑA
María Inés Barbero y Raúl Jacob (editores)
Editorial Temas

El libro analiza la expansión que han tenido las empresas latinoamericanas desde mediados de la década del ‘90. Se incluye la historia de cuatro países en los que la historia de las empresas ha registrado hasta el momento un mayor avance –México, Colombia, Brasil y Argentina– y a un caso de desarrollo tardío pero en franca expansión, como es el de Uruguay, país anfitrión del congreso.

EL CHISTE

Un contador estaba con un amigo en un banco cuando varios asaltantes armados irrumpieron en el lugar. Mientras algunos ladrones sacaban el dinero de las cajas, otros alinearon a los clientes contra la pared y comenzaron a sacarles sus pertenencias. Mientras esto sucedía, el contador sacó algo de su bolsillo y se lo puso a su amigo en la mano. Sin mirar para abajo el amigo le preguntó: “¿Qué es?”. A lo que el contador respondió: “Son los 100 pesos que te debía”.

Revista

E-l@tina, revista electrónica de estudios latinoamericanos, acaba de publicar en Internet su número 25, correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2008. Escriben Waldo Ansaldi, Juan Paz, Edelberto Torres Rivas, María Ligia Prado y Mariana Heredia, entre otros.

FEDERALISMO EN LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Provincialización y atraso

El boom minero va reproduciendo los mismos resultados que la provincialización de los hidrocarburos: extracción con fines de exportación y aumento de la dependencia.

Debate
minería

■ “Del mismo modo que la provincialización hidrocarburífera, el Pacto Federal Minero de 1993 hace de las suyas en las provincias extractoras.”

■ El secretario de Minería, Jorge Mayoral, anunció haber multiplicado por setenta “el crecimiento productivo aurífero” de la Argentina.

■ “Los minerales están sobrevaluados internacionalmente y forman parte de la burbuja especulativa de reciente estallido.”

■ “Se necesita una extracción racional de las reservas probadas y la acumulación de capital como fin estratégico de la actividad.”

POR FEDERICO BERNAL

Del mismo modo que la provincialización hidrocarburífera, el Pacto Federal Minero de 1993 y su fundamentación ideológica y política hace de las suyas en las provincias extractoras. Igual que se destacaba –y se destaca– el boom productor y exportador petrolero y gasífero en tiempos del menemismo, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, anunció como un gran logro de su gestión el haber multiplicado por setenta “el crecimiento productivo aurífero” de la Argentina “en los últimos años”. Esto permite ubicar al país como el “tercer mayor productor (de oro) del continente americano y decimocuarto en el mundo”, según expuso Mayoral en el discurso de cierre durante el Evento Argentina Oro. Si bien el análisis de la minería aurífera merece un estudio aparte, ¿en qué podría beneficiarse un país que en plena etapa de industrialización (y de crisis financiera internacional) extrae oro descontroladamente y con destino de exportación?

El boom minero del nuevo siglo va reproduciendo paso a paso los mismos resultados que los arrojados por la provincialización de los hidrocarburos: profundización del atraso provincial, extracción con fines de exportación, ascenso y proliferación de especialistas con mentalidad colonial y aumento de la dependencia del producto bruto provincial hacia la explotación de recursos naturales. Según el secretario de Minería de Salta, la “actividad minera de la provincia (incluye hidrocarburos) genera un 6,8 por ciento de su PBI. Sin embargo, la entrada en producción de los proyectos metalíferos en marcha permitirá incrementar sensiblemente esa participación” (*El Inversor Energético y Minero* Nº 32). Como se observa, la idea es acrecentar la participación de la actividad minera en el PBI salteño, cuyos recursos (los minerales) están sobrevaluados internacionalmente y forman parte de la burbuja especulativa de reciente estallido. Más grave aún, dicho incremento no será consecuencia de mayores regalías. Tomar este camino implicaría ir contra la ley minera, incompatible con una extracción racional de las reservas probadas y la acumulación de capital como fin estratégico de la actividad. Implicaría, asimismo, ir a favor de la edificación de una plataforma industrial provincial a largo plazo, independiente de la explotación de recursos naturales.

Terreno: De no haber sido porque el territorio sanjuanino está cubierto en un 80 por ciento por terreno montañoso, Gioja lo hubiera cubierto de soja.

Por su parte, en San Juan, la niña bonita de la minería argentina, la actividad de un solo emprendimiento (Veladero), representa más del 30 por ciento del pago del impuesto de ingresos brutos de la provincia (*Panorama Minero* Nº 348) y la mitad de sus exportaciones totales (*Compendio, Panorama Minero*, noviembre de 2008). El gobernador de la provincia, principal referente minero del país en el exterior, Luis Gioja, resume los hilos conductores de la política minera provincial: “La Argentina era la Pampa Húmeda, lo sigue siendo y nos sentimos orgullosos que así sea, porque tiene las vacas, el trigo, la soja, nuestro complejo industrial que representa al país. (Del otro lado, estamos las) provincias andinas, que tenemos montaña y que siempre digo que en la montaña no puedo plantar soja, no puedo criar vacas, no puedo tener esto que es el boom en la Argentina. (...) En la montaña, (...) tenemos minerales guardados. Entonces, como decía Sarmiento hace 150 años, cuando le escribía a Mitre y le decía: ‘dame las herramientas, dame los recursos y yo con la minería le voy a cambiar la cara a San Juan y al país’. Sarmiento en aquella época ya lo decía. Estoy seguro que con la minería vamos a tener los mismos números que tiene la Pampa Húmeda con la soja, con el trigo y con las vacas; que merecidamente lo tienen” (discurso de Gioja durante el Evento Argentina Oro, en 2006).

De no haber sido porque el territorio sanjuanino está cubierto en un 80 por ciento por terreno montañoso, Gioja lo hubiera cubierto de soja. ¿Cuánto hubieran “economizado en sangre de gauchos” o en expediciones punitivas, empréstitos y pertrechos Mitre y Sarmiento de haberse servido de la soja como exterminador natural del gauchaje en el siglo XIX? El pensamiento del gobernador sanjuanino sintetiza no sólo una Argentina pastoril y desindustrializada, sino un “federalismo” a imagen y semejanza de la Mesa de Enlace. Un “federalismo” enemigo de una Argentina industrial y socialmente justa. C

Focus



“¿En qué podría beneficiarse el país que extrae oro con destino de exportación?”, se pregunta Bernal.

■ **Pepsico** de Argentina adquirió la totalidad del paquete accionario de la compañía Alimesa, así como las marcas de cacao en polvo Toddy, Zucoa y Okey.

■ **Electra** climatiza la sede central de Invap en Bariloche con la instalación de dos unidades enfriadoras de líquido Modelo VLS 1004 BLN con refrigerante ecológico.

■ En el marco de su proyecto de expansión internacional, **Bonafide** inaugura su primer local en Punta del Este, ubicado en Punta Shopping.

■ **Allianz Argentina** cierra el 2008 con una facturación de 430 millones de pesos, con un aumento del 30 por ciento en las ventas.

■ **Corona**, la cerveza premium mexicana, continúa liderando ese segmento en Argentina, con un crecimiento del 76 por ciento en volumen con respecto al año anterior.

■ **Transportes Furlong**, empresa líder en servicios logísticos en Argentina y el Mercosur, obtuvo la certificación ISO 14.000 por su capacidad de gestión ambiental.

■ El **Grupo Astori**, especializado en la construcción y montaje de estructuras premoldeadas de hormigón, facturó 101 millones de pesos en 2008, un crecimiento de 63 por ciento respecto del ejercicio anterior.

FUERTE PUJA DEL BANCO CENTRAL CON EL MERCADO EN LA PLAZA DEL DOLAR

Tres rounds cambiarios

POR CRISTIAN CARRILLO

El lockout, la crisis internacional y el fin de las AFJP fueron los tres momentos de mayor tensión en la cotización del dólar. En esos tres desafíos, el Banco Central terminó dominando el mercado.

El balance financiero del año pasado se presenta en forma controvertida. ¿Hubo riesgo de un grave estallido o hubo una exageración de los peligros?

Dos corridas hacia el dólar, la pérdida de más de 4000 millones en reservas, la pulseada por la nacionalización de las administradoras de los fondos de pensión y el lockout agropecuario fueron los rasgos característicos de un 2008 amenazado además por la peor crisis bursátil desde el crac del '29. Como suele acontecer cada vez que existe incertidumbre en el mercado, los economistas del establishment desempolvan el mismo y sesgado consejo: comprar dólares para ganar con su suba. Esta vez la prédica tuvo poco respaldo y los ahorristas no salieron en forma alocada detrás de la divisa. Pero el contexto externo condujo una apreciación de 31 centavos de peso. El 2009 comienza menos turbulento y con el dólar con una débil demanda.

Los defensores de la fuga de capitales insisten en que fue un buen negocio y que lo será este año. Sin embargo, quien compró el billete verde a principios de 2008 y lo vendió el 30 de diciembre pasado obtuvo una rentabilidad de 9 por ciento, en pesos, contra una tasa de interés del sistema bancario de 16 por ciento, y apenas empardaron la inflación oficial.

La plaza cambiaria tuvo durante el año pasado tres sobresaltos. El primero se desató con el conflicto entre el Gobierno y los dirigentes ruralistas. A los cortes de rutas se sumaron cadenas de mail y de mensajes de texto anunciado una megadevaluación. La jugada contra la moneda local elevó el valor del dólar seis centavos, hasta los 3,22 pesos. La respuesta fue una agresiva intervención del Banco Central vendiendo divisas de "contado" y apostando a futuro a la baja. El resultado: el dólar llegó a 3,04 pesos –12 centavos por debajo del arranque del año– y el Central obtuvo un beneficio por su jugada de entre 150 y 200 millones de pesos. El BC ganó el primer round.



DyN

El dólar cerró 2008 en 3,47 pesos, con un BCRA en control de la situación cambiaria.

La divisa se mantuvo luego en esos valores hasta septiembre. Entonces recrudeció la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la quiebra del cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos (Lehman Brothers), lo que fogoneó una nueva corrida. En la región, Brasil fue el más afectado. El dólar pasó de 1,60 hasta tocar los 2,50 reales y la fuga de capitales debió ser atendida con reservas de la banca central brasileña.

La ampliación de la brecha entre el peso y el real impulsó a la entidad comandada por Martín Redrado a convalidar un reacomodamiento alcista, pero la pesada historia de devaluaciones en el país aceleró la movida. Otra vez aparecieron los gurúes presagiando un dólar entre 4 y 5 pesos. Fue allí que la mesa de cambios del BC pusiera en la pantalla del mercado electrónico 1000 millones de dólares para desarticular la demanda especulativa. Otro triunfo del BC en el segundo round.

Con la estatización del sistema provisional y la desaparición de las AFJP de la escena bursátil, los inversores institucionales ensayaron una nueva movida "desestabilizadora". A través de la operatoria de contado con liquidación, las sociedades de bolsa ofrecían sacar dinero del país con una simple compraventa de títulos y acciones. Por este sistema se escaparon del país más de 2000 millones de dólares, una cantidad similar al aumento de los depósitos en bancos uruguayos de parte de no residentes en moneda extranjera. Junto con la Comisión Nacional de Valores, el Central impuso varias trabas a esa operatoria. Esos obstáculos le dieron respiro al mercado. También contribuyó la recuperación de los precios de los commodities agropecuarios. Tercer round ganado.

Esta situación le permitió al Central recomponer reservas –su stock cerró en 46.374 millones de dólares, un 5 por ciento por encima de 2007– y conducir a la divisa nuevamente cerca de los 3,50 pesos. De esta manera, el peso se devaluó en 2008 contra el dólar un 9,7 por ciento, mientras que su principal socio comercial, Brasil, sufrió una variación de más de 60 por ciento durante el año y finalizó diciembre con un retroceso del real de más de 30 por ciento.

En comparación, los números locales no se ven tan "peligrosos", pero eso no parece importar a los "especialistas" a la hora de predicar; perdón... de predecir.

POR DIEGO RUBINZAL


Daniel Jayo

En los últimos quince años, la actividad vitivinícola sufrió una intensa transformación.

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VINO ARGENTINO

En las mesas del mundo

El paradigma productivo local respondió a las señales del mercado internacional. Se acentuó la tendencia a una mayor concentración en la propiedad de la tierra.

El vino argentino está jugando en las ligas mayores. En los últimos quince años, la actividad vitivinícola sufrió una intensa transformación. Desde comienzos del siglo XX, la vitivinicultura estuvo orientada a satisfacer la demanda interna de vinos básicos. Los periódicos desequilibrios entre la producción y la demanda motivaron una activa participación estatal tendiente a remediar los problemas de sobreproducción. La reconversión industrial realizada en la década de los noventa modificó ese escenario.

La adquisición de bodegas por parte de capitales internacionales (chilenos, norteamericanos, portugueses, franceses, españoles, holandeses, japoneses) y de inversores locales extrasectoriales fueron el puntapié inicial para un cambio de paradigma productivo. Esos cambios se producen "al mismo tiempo que se registra una acentuada desregulación económica que, al igual que en el resto de la economía, potencia el papel de los sectores empresarios más significativos y concentrados de la dinámica sectorial. De esta manera, se interrumpe la tradicional regulación estatal sustentada en acciones tales como la fijación de cupos de producción y comercialización, el bloqueo de los excedentes, el prorrateo de los despachos al consumo e incluso las políticas provinciales canalizadas a través de las empresas estatales Giol o Cavic", sostienen Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu en la investigación *El complejo vitivinícola argentino en los noventa: potencialidades y restricciones*.

La modificación del paradigma productivo respondió a las señales emitidas por el mercado internacional: caída global del consumo e incremento de la demanda de vinos de mayor calidad. En la Argentina, el consumo interno cayó a la mitad en los últimos 30 años. Antes de la reconversión, las bodegas intentaban mejorar su rentabilidad con un aumento de su producción. Los nuevos actores promovieron un giro hacia la calidad. En un escenario mundial de sobreoferta estructural de uvas, el objetivo era posicionar vinos varietales de calidad reconocida. La utilización de cepajes de alta calidad enológica, la introducción de tecnologías de riego avanzadas, la reconversión de variedades criollas a finas fueron las características de ese proceso. Esa nueva orientación productiva se acompañó con una integración vertical de las empresas (cultivos y bodegas) y una reorientación hacia la producción de vinos finos y a los mercados externos.

Esos cambios cualitativos se tradujeron en un sustancial aumento del volumen exportable. En 2007 las exportaciones argentinas de vinos, mostos, uva de mesa y pasas alcanzaron los 770 millones de dólares. Los primeros seis destinos de exportación de vinos en botella fueron Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, Holanda y Dinamarca. En el caso de los vinos espumantes, los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Brasil, Japón, Uruguay, Paraguay, Holanda, Chile, Perú, Reino Unido y Venezuela.

Actualmente, la Argentina se ubica en el noveno lugar en el ranking mundial de exportadores de vino. El listado está encabezado por Italia, Francia, España, Australia, Chile, Estados Unidos, Alemania y Portugal.

Los principales consumidores son los franceses, italianos, norteamericanos, alemanes, españoles, chinos, ingleses, argentinos, rusos y rumanos. Según la última edición del informe de M. Shanken Communications "El Mercado Global de Bebidas: Presente y Futuro", China es el mercado vinícola que más creció en el mundo en 2007. Otro mercado prometedor es el ruso, que está creciendo a un ritmo de 12 a 15 por ciento anual.

En Argentina existe un Plan Estratégico, confeccionado por organismos públicos y sectoriales, para posicionar a la Industria Vitivinícola en el mundo. El objetivo es alcanzar los 2000 millones de dólares de ventas anuales, lo que representaría alcanzar el 10 por ciento del volumen de las exportaciones mundiales. Detrás de ese futuro promisorio se esconden los costos de la reestructuración industrial que tuvo el sector. Rodolfo Richard-Jorba, en su trabajo *Crisis y transformaciones recientes en la región vitivinícola argentina. Mendoza y San Juan, 19702005* (Estudios Sociales, Volumen 16, Número 31, 2007) señala que "se acentuó la tendencia a una mayor concentración en la propiedad de la tierra porque no existieron políticas tendientes a agrupar a los pequeños productores o cooperatizarlos para racionalizar los recursos económicos y técnicos disponibles, asegurando rentabilidad a sus explotaciones". Los productores de uva que, sin estar integrados verticalmente, lograron sobrevivir (alrededor de 8000) están en una delicada situación. Son la contracara del "paradigma de calidad".

drubinzal@yahoo.com.ar



■ La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) dispuso la creación de un registro único para todas las operaciones de **exportación** de carnes, granos y lácteos, ante la necesidad de dar previsibilidad al comercio frente a la crisis financiera internacional.

■ El proyecto "**Lácteos** funcionales en Chivilcoy", elaborado por técnicos de esa localidad bonaerense, obtuvo el primer premio en el concurso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) "La Mirada Larga".

■ Medio Oriente compró 7.467.730 toneladas de **agroalimentos** argentinos por 2506,1 millones de dólares durante los primeros diez meses del año, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

ENFOQUE



POR JUAN PABLO BOHOSLAVSKY *

El andamiaje jurídico moderno de protección de las inversiones extranjeras está montado sobre el sistema de arbitraje, siendo el Ciadi el más conocido y extendido. Los árbitros deciden sobre las demandas que los inversores extranjeros presentan contra los países que las alojaron y presuntamente frustraron de manera ilegítima.

A diferencia de lo que ha ocurrido con el comercio mundial, que ha sido detalladamente regulado por la Organización Mundial del Comercio, las reglas jurídicas formales aplicables a las inversiones extranjeras son prácticamente inexistentes. Es por eso que los árbitros mismos han tenido que desarrollar esas pautas, que se encuentran en permanente evolución.

Quiero mencionar una de las ineficiencias que ese sistema de arbitraje ha demostrado padecer, en cuya corrección se juega la sustentabilidad del propio sistema de protección de los derechos de los inversores: si todas las partes no creen en sus bondades, el sistema simplemente no puede funcionar para siempre. Se trata de la rigidez con que los árbitros interpretan los contratos que vinculan a los inversores con los gobiernos. Las regulaciones y políticas públicas, aun cuando no sean arbitrarias, pueden afectar las inversiones extranjeras. Por ejemplo, cuando las normas de protección ambiental se tornan más rigurosas. O cuando, para superar una situación extraordinaria se dictan normas de emergencia, como sucedió en Argentina luego de su colapso en 2001, o en numerosos países asiáticos al derrumbarse sus sistemas financieros y bancarios en los '90. Salvo contadas excepciones, tal como lo demuestran los laudos del Ciadi que castigaron a Argentina en el sector del gas, la situación de emergencia nacional no ha permitido al país acceder a un reajuste de los derechos y obligaciones de las partes involucradas en esas inversiones.

La manera de calcular las indemnizaciones tampoco ayuda. Como se suelen reconocer los daños y las ganancias proyectadas que finalmente no se pudieron obtener, eso significa que el inversor estará en la misma posición que si hubiera realizado la totalidad de la inversión y el negocio hubiese funcionado perfectamente durante todo el período de la inversión. No es casual que la Agencia de Seguros de Depósitos Federales de Estados Unidos no paga intereses futuros. Se presume que el afectado, una vez que cuente con el dinero, lo aplicará a otra actividad productiva y rentable.

Todo esto puede generar estímulos perversos, tanto en los inversores como en los gobiernos. Por ejemplo, los inversores se ven tentados a demandar antes que renegociar y reajustar los contratos. También lleva a que busquen deliberadamente proyectos de alto riesgo político, pues existirán mayores probabilidades de que se produzca la contingencia y se lleven todas las ganancias proyectadas, pero anticipadamente y sin trabajar. Adicionalmente, no se prioriza la prudencia en la administración del negocio (usualmente vinculados a recursos naturales o servicios públicos), ya que los árbitros analizan exclusivamente el comportamiento de los Estados –no de los inversores– a la hora de decidir las compensaciones. Por su parte, los gobiernos se vuelven reacios a realizar modificaciones regulatorias, aun cuando de esa manera promoverían el interés público o beneficiarían intereses económicos más generales.

Si comparamos la rigidez con la que los árbitros suelen interpretar los contratos de inversión extranjera con la extensión en la que los jueces de los países industrializados permiten a esos gobiernos modificar los derechos de las empresas fundados en el interés público, surge un notable desfasaje. En Estados Unidos y la Unión Europea es mucho más lo que les está permitido hacer a los gobiernos (cambios en la regulación) que lo que los árbitros internacionales le permiten a los países en desarrollo. Dicho desfasaje se presenta incluso en el mismo ámbito de la economía mundial: cuando se trata de deudas financieras, en mayor o menor grado, los clubes de París y Londres entienden que las crisis fuerzan a modificar las condiciones contractuales originales, nada de lo cual suele permitirse a los Estados cuando se trata de inversiones.

Si el diagnóstico realizado en esta nota es correcto, debería llevar a Argentina, que viene jugando un rol central como demandado en el sistema de arbitraje, a modificar sus Tratados Bilaterlaes de Inversiones (TBI). Eso no significa que los deba denunciar. Sí en cambio debería promover la incorporación de reglas claras en esos TBI, que aseguren un equilibrio entre la "santidad de la letra de los contratos" y los intereses públicos involucrados al momento de implementarse una nueva regulación en el país que aloja las inversiones.

Argentina debería aprender de sus propios laudos y promover cambios en los TBI en la dirección señalada, caso contrario, pensando a mediano y largo plazo, la rigidez con que los árbitros castigan al país no encontrará más límite que el trabajo que puedan hacer los abogados que representan al Estado en el Ciadi. De esa manera se pierde la dimensión política de esta cuestión legal, y por inercia se repiten errores de los '90. C

* Investigador de la Universidad de Nueva York.

EL BAUL DE MANUEL **Por M. Fernández López**

Cambio tecnológico

Desde Schumpeter (1911) sabemos que las innovaciones son un factor impulsor de la actividad económica. Desde Solow (1957), sabemos que el *cambio tecnológico* es un factor más del crecimiento, que se suma al trabajo, el capital y la tierra, pero que no actúa solo, sino a través de alguno de los otros tres. El jefe de la fisiocracia, François Quesnay, propiciaba una mejora del modo de explotar el suelo. La Revolución Industrial inglesa, asociada a la invención de la máquina de vapor por James Watt (1765) y sus aplicaciones a la producción y el transporte, operó a través de mejoras en la capacidad productiva de los bienes de capital. En la Argentina, el cambio tecnológico se concibió como realizable a través del factor trabajo, mediante el empleo del mismo en actividades nuevas o la incorporación al mismo de nuevos conocimientos, es decir, la educación. Esta vía hacía realidad la observación de Adam Smith: "El hombre educado a costa de mucho trabajo y de mucho tiempo en una cualquiera de las profesiones que exigen destreza y habilidad extraordinarias puede compararse a una de esas máquinas costosas". El distinguido proponente de esta vía fue, entre nosotros, nada menos que el padre de la patria, el licenciado Manuel Belgrano, en 1795. La educación en artes y oficios no sólo dignificaba a los educandos mejorando su condición social, sino también la capacidad productiva del país y abría la posibilidad de aclimatar localmente nuevos descubrimientos e inventos. El siguiente párrafo de su primera *Memoria* es elocuente: "Los buenos principios los adquirirá el artista en una escuela de dibujo, que es el alma de las artes. Algunos creen inútil este conocimiento, pero es tan necesario que todo menestral lo necesita para perfeccionarse en su oficio: el carpintero, cantero, bordador, sastre, herrero, y hasta los zapateros no podrán cortar unos zapatos con el ajuste y perfección debida sin saber dibujar. Aun se extienden a más que los artistas, los beneficios que resultan de una escuela de dibujo; sin este conocimiento los filósofos principiantes no entenderán los planisferios de las esferas celeste y terrestre, las de los armilares que se ponen para el movimiento de la Tierra y más planetas en sus respectivos sistemas, y por consiguiente los diseños de las máquinas eléctricas y neumáticas, y otros muchos". (M. Belgrano, *Memorias*, Biblioteca Página/12, pág. 24) C

Círculos

La estructura económica de la sociedad es una trama de relaciones que vincula cada parte con las demás, por lo que no se puede pensar a una parte cualquiera separada de las otras. Por ello algún estudioso propuso comparar la acción social con la reparación de un auto abollado: el inexperto golpea donde está el bollo, arriesgándose a generar con su acción nuevos bollos en otras partes, mientras que el chapista experimentado va golpeando suavemente alrededor del bollo primitivo. Este rasgo de interdependencia aparece en distintas categorías, a veces no muy claramente definidas. Una es la de "círculo vicioso". G. Myrdal remitía a un libro de C. E. A. Winslow, *El costo de la enfermedad y el precio de la salud* (1957), donde expresaba: "la pobreza y la enfermedad constituían un círculo vicioso. Los hombres y las mujeres estaban enfermos porque eran pobres; se empobrecían aún más porque estaban enfermos, y empeoraban de salud porque habían seguido empobreciéndose". Para el Premio Nobel en Ciencias Económicas 1974, un círculo vicioso es un "proceso circular y acumulativo que deprime constantemente el nivel de vida, y en el que un factor negativo es, a un tiempo, causa y efecto de otros". Ragnar Nurkse, en sus conferencias en El Cairo (1952) habló del círculo vicioso de la pobreza: "El concepto involucra una constelación circular de fuerzas que actúan y reaccionan unas sobre otras, en forma que a un país pobre lo mantienen en estado de pobreza. ... puede darse el caso de un hombre que, a causa de su pobreza, no tenga alimento suficiente; su estado desnutrido le afectará la salud, debilitándolo; esta debilidad física reducirá su capacidad de trabajo, lo que lo mantendrá pobre, con lo que no tendrá alimento suficiente, y así siguiendo. Ese estado de cosas, respecto de todo un país, puede resumirse en un lugar común: un país es pobre porque es pobre". Nunca un círculo vicioso de la pobreza puede convertirse en círculo *virtuoso* –como gustan decir los políticos– a menos que se produzca un cambio decisivo en el componente pobreza y sus infaltables ingredientes que la acompañan: alimento insuficiente, mala salud e insuficiente capacidad laboral. No se sale de la pobreza sólo con buenas intenciones. No se ha visto hasta ahora que ninguna canasta navideña, ningún primer cero kilómetro, ni ningún recambio de heladera hayan permitido salir de su triste condición a un solo pobre. C